

**LA LOGSE Y LA (CONTRA) REFORMA ANUNCIADA
FORO DE DEBATE SOBRE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL**

Universidad Internacional de Andalucía
Sede Antonio Machado de Baeza
14-16 de Diciembre de 2001



El documento que sigue es la síntesis de las reflexiones y el debate de un grupo de profesionales* de los diversos niveles del sistema educativo, preocupados y comprometidos con la búsqueda de la calidad del sistema educativo en términos de equidad, eficacia, relevancia y satisfacción para todas las personas implicadas en el mismo. Lo ofrecemos como un punto de partida, como un espacio para estimular la discusión pública y la reflexión serena y comprometida sobre los retos que enfrenta el sistema educativo español en el siglo XXI.

La sociedad es consciente de la importancia del sistema educativo para la distribución de oportunidades vitales y la realización personal de las alumnas y los alumnos, así como para la convivencia política, la cohesión social y el progreso económico de la colectividad. Y también lo es de la dificultad de articular políticas públicas y prácticas profesionales adecuadas. Actuar en un ámbito tan importante y complejo requiere un elevado grado de consenso entre la comunidad social y los profesionales de la educación, que no puede proceder sino de un amplio debate que permita penetrar en los conceptos de calidad, relevancia y justicia social que deben orientar la política educativa y la práctica escolar.

* De la redacción de este documento se han ocupado Nieves Blanco, Juan Bautista Martínez y Rafael Porlán, coordinadores del Foro. Las y los asistentes que participaron en el debate y aportaron sus ideas son: José Gimeno, Mariano Fernández Enguita, Angel Pérez, Marina Subirats, Jurjo Torres, Jaume Martínez Bonafé, Amparo Tomé, Marina Fuentes-Guerra, Eduardo García, Emilio Iguaz, Francisco García, Miguel Angel Santos, Antonio Guzmán, Manuel Alcalá, José Ojeda, Ramón Porras, Francisco Santos, Encarna Soto, Manuel Zafra.

D) LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO.

En las sociedades plurales y democráticas, los bienes públicos deben ser accesibles, deseables, útiles y funcionales. La educación es un bien público fundamental que debe ser ofrecido a toda la ciudadanía de manera integral, capaz de satisfacer las necesidades y los intereses de todos, en todos los ámbitos del desarrollo personal y colectivo.

Necesitamos establecer nuevos parámetros para hacer frente a la actual situación de fuerte conservadurismo ideológico, de autoritarismo en los procedimientos, con una legitimación social tramposa de las políticas que se anuncian y se emprenden, sin una oposición definida y eficaz, con un sistema público bastante vulnerable y endeble por su historia y sin un debate nacional para establecer las prioridades de lo que necesitamos para la educación española y la educación pública. Más allá de la polémica sobre la LOGSE, es urgente el debate para definir las coordenadas de un sistema educativo moderno, eficaz en la gestión de sus recursos y el desarrollo de sus propósitos, asentado en el principio de justicia y orientado a lograr la satisfacción de quienes estamos implicados en él como estudiantes, docentes, padres y ciudadanos.

- La educación es un derecho que debe concretarse en la existencia real de una educación para todas y todos. La universalidad en el acceso al sistema educativo (lograda por la enseñanza obligatoria) necesita ser desarrollada eficazmente, garantizando la atención a todo el alumnado, sabiendo que sus necesidades e intereses serán diversos y diferenciados.
- La educación pública necesita un proyecto de vida colectivo compartido, que facilite la integración cultural y social, apoyada en unos mínimos con capacidad para integrar las diferencias y asegurar la cohesión social. Un sistema público laico, respetuoso con los diferentes credos, culturas y tradiciones pero justo en la distribución de oportunidades y recursos.
- La calidad del sistema educativo se vincula a su capacidad para promover el desarrollo integral de las alumnas y los alumnos, proporcionándoles una educación funcional, útil, eficaz y satisfactoria. La idea de calidad debe traducirse en ofrecer el máximo de posibilidades a todos los estudiantes. Dar más educación a más gente no baja la calidad de la educación de un país; decir lo contrario sí la baja.
- Potenciar la educación de los individuos como sujetos singulares, allí donde estén y con las posibilidades y las limitaciones personales o sociales que presenten. Aprender es una tarea para todos y para toda la vida. La educación pública debe asumir el compromiso de elevar el nivel de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia, sin segregar ni jerarquizar.
- La comprensividad supone igualdad básica en la provisión de oportunidades para que toda la población acceda a unos mínimos que permitan a todos y cada uno de los estudiantes mantener abiertas todas las posibilidades de elección al finalizar la escolarización obligatoria. La educación pública debe garantizar la equidad en la distribución de esfuerzos, recursos y oportunidades y la solidaridad con quienes

tienen más dificultades para acceder a los beneficios que la educación proporciona. La educación no es una mercancía y no debe dejarse al albur del mercado.

- El fracaso escolar en nuestro sistema educativo no es nuevo, ni achacable a la LOGSE, pese a la cansina afirmación del PP. Escolarizar hasta los 16 años a la población que estaba fuera del sistema es un logro histórico, si bien ha generado nuevas necesidades que requieren de soluciones nuevas. El fracaso no es una maldición; quienes fracasan escolarmente son ciudadanos y ciudadanas nuestros que, en condiciones poco favorables, no han podido beneficiarse suficientemente del servicio educativo y a quienes no se puede culpabilizar por ello.

II) EL CURRÍCULUM.

Clarificar y concretar el modelo de desarrollo personal y social al que tendemos resulta necesario para fijar el marco básico del currículum. La formación personal, la preparación para intervenir en una sociedad democrática, la capacidad para acceder a la información y para trabajar con ella convirtiéndola en conocimiento debe ser la función de la escuela obligatoria. La formación para integrarse profesionalmente debería dejarse para la educación postobligatoria.

El gobierno ha señalado a la comprensividad como el enemigo a batir, sin pruebas, y achacándole la responsabilidad del fracaso escolar, olvidando nuestros problemas y déficits estructurales, e ignorando que los países de nuestro entorno tienen problemas similares sin LOGSE. Por encima de este debate, debemos mantener algunas directrices:

- Desarrollar el principio de la comprensividad requiere una concepción flexible del currículum que asegure simultáneamente una igualdad básica de oportunidades y avances equitativos de resultados, la solidaridad para con quienes afrontan dificultades especiales, la equidad basada en una pedagogía de la contribución y el esfuerzo y la existencia de oportunidades de excelencia para quienes puedan aprovecharlas.
- El currículum debe ser un asunto de debate público y consenso ciudadano; las leyes deberían establecer sólo algunos principios marco sin descender a la especificación de un currículum detallado en sus temáticas. El desarrollo del currículum y la búsqueda de las formas más adecuadas para trabajar con él en los centros y las aulas es un asunto de naturaleza pedagógica, que debe ser abordado por los profesionales de la educación, sensibles a la colaboración con todas las instancias ciudadanas que permitan asegurar su adecuado desarrollo.
- La comprensividad puede y debe buscarse por distintas vías, pero con plena conciencia de los posibles efectos perversos de éstas. Comprensividad no es equivalente a homogeneidad, ni diversidad significa desigualdad. La diversidad de las y los estudiantes es un hecho incontestable y la comprensividad homogeneizadora se opone al principio cívico de igualdad y provoca lo contrario de lo que pretende: excluye en el centro y expulsa de él.

- Las adaptaciones curriculares, así como el establecimiento de itinerarios personales, pueden ser opciones didácticas adecuadas siempre que sean provisionales, parciales y no configuren itinerarios especializados e irreversibles. La atención y la valoración de la diversidad de capacidades, intereses o ritmos de aprendizaje debe y puede ser protegida, al tiempo que se fortalece la pertenencia de las y los estudiantes a un colectivo, a un grupo, cuya cohesión y riqueza está en relación directa con el enriquecimiento y la satisfacción de sus miembros.
- La escuela ha de ofrecer respuestas adecuadas a los diferentes colectivos que están escolarizados. No puede obviar la cultura de las niñas y los niños, de los jóvenes y adolescentes, la de las mujeres, los referentes culturales populares y los ligados a diferentes clases sociales y contextos de vida.
- El conocimiento debe estar al servicio del tratamiento de problemáticas significativas y relevantes, aquellas que permitan al alumnado analizar y comprender mejor los problemas que afectan a toda la ciudadanía. Si el conocimiento se convierte en un fin se produce el academicismo, útil para la selección social pero inútil para la formación de los estudiantes.
- Alumnos y alumnas deben ser sujetos de responsabilidad en las actividades que se desarrollan y deben asumir los deberes que de su participación se derivan. El grado de implicación del alumnado en su propia educación es un indicador básico de la calidad de los aprendizajes así como un requisito para un adecuado desarrollo personal, en el proceso de ir adquiriendo y ejerciendo derechos y libertades, y asumiendo la responsabilidad por sus actos.
- Hay que estimular espacios estratégicos y promover la elaboración y difusión de materiales curriculares alternativos y experimentados, de manera que actúen como ejemplificaciones dinamizadoras de los cambios curriculares.

III) LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN.

La **evaluación del sistema educativo** es fundamental en el ejercicio de la ciudadanía, por lo que significa como ejercicio de responsabilidad pero también por la exigencia de control de un servicio público de calidad. Y siempre debe ser realizada desde criterios de justicia social, potenciando las funciones de apoyo y ayuda en detrimento de las de clasificación.

- La evaluación pretende la democratización y la capacitación ciudadana para el ejercicio responsable del control público. Debe facilitar la comprensión y el análisis crítico de la calidad de ese servicio, así como las decisiones ciudadanas sobre el cambio y la mejora.
- La sociedad debe disponer de información y el sistema educativo proporcionar un sistema riguroso y eficaz de control y responsabilidades respecto del uso no elitista de los recursos que se ponen a disposición de los fines de la educación.

- La idea de control público debe partir de la transparencia y deliberación acerca de qué datos se seleccionan, quién decide cuáles son importantes y quién los interpreta, qué indicadores van a utilizarse, bajo qué principios de procedimiento o valores se seleccionan y se interpretan. Es importante, igualmente, que todos los colectivos puedan hacer oír su voz, sobre todo quienes tienen menos capacidad para intervenir.
- Las reválidas son mecanismos externos de criba y selectividad para el alumnado. Su implantación no eleva el nivel de rendimiento, ni facilita la circulación por el sistema educativo, antes bien estrangula la pirámide de la población escolar y condiciona una formación raquílica dependiente del tipo de pruebas definitivas.

La **evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje** tiene sentido en la medida en que nos proporcione información sobre su desarrollo, tanto al profesorado como al alumnado y a las familias.

- La evaluación debe ser siempre realizada desde criterios de justicia social, lo que significa que nunca debe ser utilizada para discriminar o segregar al alumnado. Si la escolaridad obligatoria es comprensiva, la evaluación del rendimiento no puede dirigirse a la clasificación y al etiquetado.
- Potenciar las evaluaciones globales que consideren diferentes condiciones y criterios sobre el trabajo escolar frente a la evaluación del rendimiento basada en estándares únicos y parcelados. Si parece admitido que no todo el mundo progresa al mismo tiempo, ni existe una única forma, ni ritmo de maduración y desarrollo de capacidades, la evaluación ha de valorar progreso, esfuerzo y proceso, además del rendimiento final.
- En un periodo formativo común y obligatorio, no debe haber titulaciones diferenciadas. El problema de la diversidad de capacidades y ritmos en la adquisición de conocimientos por parte del alumnado no se resuelve con la evaluación sino con la adopción de medidas pedagógicas, curriculares y organizativas que permitan una atención diferenciada y equitativa.

A la actual aplicación de **la promoción continua** se le suelen atribuir muchos males e incluso se la señala como factor relevante que causa el fracaso escolar. Su rechazo se entiende como una demanda de homogeneización de grupos y una falta de reconocimiento de la diversidad del alumnado.

Está demostrado que las repeticiones de curso no mejoran las condiciones de los que repiten a la vez que sí crean sentimientos de fracaso y pérdida de autoestima, ruptura de relaciones sociales, aumenta los conflictos docentes de relación con alumnado y padres, provocando selección social. En caso de suprimirse la promoción continua se producirá una estrangulación de la organización de los centros y aumentará el desencuentro actual entre las familias, el alumnado y el profesorado.

La promoción continua ayuda a incorporar al alumnado al sistema, exige flexibilidad organizativa en agrupaciones, tiempos, jornada, diversificación de materiales, aceptando la heterogeneidad del alumnado y permitiendo la variedad de formas metodológicas más

satisfactorias para el alumnado porque satisface sus necesidades, se acomoda a su ritmo de aprendizaje y ofrece oportunidades de éxito. Algunos principios para una alternativa en el desarrollo de la promoción continua:

a) La organización de jornada completa, calendario y curriculum deben ser flexibles y variados y permitir pasar de un grupo a otro sin generar estigmas. b) Romper las distinciones de tiempo escolar-no escolar (de hecho ya roto por las desigualdades sociales), o prejuicios sobre las edades de aprender. c) Las y los estudiantes con mayores necesidades deben ser atendidos prioritariamente, sin que ello signifique privar a los demás de alcanzar metas tan elevadas como seamos capaces de proponerles y ellos de lograr. d) En la decisión de agrupamientos, la educación afectiva ha de primar sobre la instructiva. e) Corresponsabilizarse con el alumnado y padres/madres de las decisiones de promoción y sus implicaciones. f) Evitar por todos los medios abandonos y absentismos y denunciar los grupos de exclusión y sus mecanismos ocultos. g) Organizar planes de adaptación con estrategias multinivel y multigrupal. El tiempo de estancia del alumnado en el centro debe ser aumentado, lo que no significa que aumente el del profesorado. h) Es preciso cambiar las formas de evaluación y el contenido y sentido de las juntas de evaluación.

IV) EL PROFESORADO.

En el contexto europeo somos uno de los países que menos tiempo dedica a la formación profesional de su profesorado. La nueva concepción de profesión que requiere la sociedad en que vivimos y la escuela que necesitamos, demanda ampliar urgentemente la duración de la formación inicial (nivel de licenciatura) así como modificar su enfoque e iniciar experimentaciones.

La actual propuesta de formación inicial del profesorado de secundaria está quedando totalmente cerrada e hipotecada para las facultades de educación y escuelas universitarias, desaprovechándose una coyuntura de renovación generacional posible de la función docente a la vez que renunciando definitivamente a modelos de formación como los desarrollados en la formación de profesionales con un alto componente teórico-práctico (como los MIRs).

Hay que vincular la Formación Inicial del Profesorado a la innovación y la investigación universitaria. Algo que puede lograrse si la formación tiene lugar en los centros junto a profesionales innovadores de primaria y secundaria, de tal manera que tanto la formación inicial como la primera etapa docente se desarrollen en el marco de tutorías prácticas, con una primera etapa de intervención tutorizada, parcial y progresiva implicando la práctica y la teoría. Igualmente resulta necesario incentivar la investigación universitaria que se vincule a ese núcleo fundamental de formación inicial e innovación.

La función profesional de educadores y facilitadores (provocadores de aprendizajes significativos) es de diagnosticar, experimentar, diseñar, evaluar los contenidos, contextos y las situaciones. Una función que requiere introducir cambios sustantivos en el proceso de formación (inicial y permanente), en el estatus profesional y la carrera

docente, así como en la selección y adscripción del profesorado. Algunos principios para abordar el desarrollo del conocimiento profesional docente:

- Hay que conocer, reconocer (valorar) y difundir las buenas prácticas profesionales, en la diversidad de enfoques y líneas de trabajo existentes. La diversidad de enfoques pedagógicos y la experimentación de modelos constituyen un patrimonio colectivo que debe reconocerse, difundirse y potenciarse.
- En la práctica docente la dimensión ética parece olvidada lo que impide la práctica de un servicio público educativo de calidad. Sería importante el establecimiento de unos principios deontológicos o criterios éticos que orienten la actuación docente.
- Las estrategias formativas han de adaptarse a niveles, ritmos, necesidades y grados de desarrollo profesional diferentes y deberían ser, por tanto, muy diversas.
- La formación de un pensamiento práctico profesional debe estar apoyado en un componente cultural de altísimo nivel. Si transmitir conocimientos requería una amplia competencia cultural, utilizar el conocimiento para comprender problemas requiere un nivel superior

V) DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA.

La educación es un servicio público, articulado para satisfacer un derecho sustantivo, que es fundamental para la vida de las personas. La participación de las personas y los grupos a quienes afecta este derecho debe constituir una garantía para que el derecho a la educación no se convierta en una imposición.

Conjugar los intereses del profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad resulta complejo, aunque es imprescindible para garantizar la participación en los centros escolares. En ello, el profesorado y los equipos de dirección deben jugar un importante papel, limando la asimetría existente entre su capacidad de decisión y la de otros colectivos (estudiantes y familias, sobre todo), estimulando y legitimando la participación de estos últimos.

Pero la participación no es sólo necesaria para garantizar la capacidad de decisión de quienes tienen intereses directos sobre la educación, sino que también es fundamental para abordar de manera más completa y adecuada la convivencia en el interior de los centros escolares. La orientación hacia el gerencialismo en la organización, el personalismo en la dirección, la potenciación de los órganos unipersonales frente a los colegiados y el autoritarismo en la toma de decisiones, no constituyen vías adecuadas para favorecer la democracia, la participación y la convivencia en los centros escolares.

- La escuela es un lugar de aprendizaje de la participación ciudadana y la toma de decisiones individuales y colectivas. La formación de la ciudadanía, que constituye el principio básico de la educación obligatoria, requiere que la escuela constituya, en todos sus ámbitos, un escenario democrático que debe favorecer que la comunidad “entre” en la escuela y facultando a las y los estudiantes para que intervengan en la comunidad.
- Estimular la participación y crear y potenciar los vínculos de relación entre los distintos grupos que participan en la escuela. Es preciso dar a los titulares del

derecho a la educación –alumnado- y a sus representantes legales –padres- más voz e influencia, más capacidad de decisión y de intervención en la organización y la política educativa.

- Potenciar los vínculos de relación entre los diferentes grupos que participan en la escuela, apoyándose en un modelo de escucha y negociación en lugar de hacerlo sobre un esquema de conflicto de competencias entre los diferentes sectores. De este modo resultará más viable poder ocuparse de los aspectos colectivos, públicos, de la enseñanza, aquellos que no son de “nadie” en concreto pero que afectan a todos.
- Articulación de los centros en torno a proyectos y a un equipo que los sostiene y los desarrolla. Proyectos que, fruto de un trabajo colectivo, reflejen los principios de quienes trabajan en la escuela y su compromiso para atender a las características definidas de su contexto y su alumnado.
- Potenciar lo colegiado frente a lo unipersonal. Hacer recaer en una única persona, el director o la directora, la responsabilidad de la gestión del centro supone un proceso progresivo de burocratización del sistema.
- Puesto que no hay constancia científica de que el profesorado que es elegido para la dirección sea peor que el que es designado, la elección democrática es preferible porque supone un plus democrático mayor representatividad y coherencia con el colectivo.
- No hay modelos universales de gestión, de participación o de relación; son y deben ser diversos. Los centros deben tener libertad para desarrollar con singularidad los mismos valores, en función de sus características y del contexto en que se sitúan.
- Potenciar y promover la cultura de la relación, de la escucha y de la negociación. Dinamizar la participación y facilitar la convivencia ha de apoyarse, en gran medida, en la capacidad de escuchar a quienes están implicados en el proyecto educativo, en garantizar que su voz tenga presencia en las decisiones y que sea oída en cuestiones de relevancia educativa.
- Hay que diferenciar las tareas burocráticas y las pedagógicas, potenciando estas últimas: animar un proyecto educativo, realizar la coordinación pedagógica, estimular iniciativas, evaluar internamente los procesos, favorecer la formación del profesorado en la indagación, el perfeccionamiento y la innovación.